



INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS TITULADO “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. AÑOS 2020-2022”.

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, se exponen a continuación las necesidades que se pretenden cubrir, mediante el presente contrato para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de la Consejería de Políticas Sociales y Familias, Igualdad y Natalidad.

La Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, en adelante CPSFIN, dispone de una serie de bienes patrimoniales, tanto de carácter inmueble como mueble, que combinados con sus recursos humanos son del todo indispensables para la prestación de los servicios que le corresponden.

En este sentido, ante la necesidad de garantizar la protección de este patrimonio material y la seguridad de los empleados públicos, la de los trabajadores que prestan servicio en los diferentes establecimientos y la de los ciudadanos presentes en sus dependencias, así como la salvaguarda de los documentos que se custodian, la CPSFIN dispone de una amplia gama de sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión; video vigilancia; y de detección, alarma y protección contra incendios. No obstante lo anterior, la existencia de este tipo de instalaciones no asegura, por sí misma, el mantenimiento de un nivel de seguridad adecuado cuando, además de identificar la existencia de una determinada contingencia, se requiere la aplicación de medidas de control proporcionadas y ajustadas a cada circunstancia, por parte de personal especializado en materia de seguridad privada, control de emergencias y, si fuera el caso, la actuación directa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por otra parte, la implantación de las medidas que se requieren para garantizar ese nivel de protección, se encuentran en el ámbito de la seguridad privada; ámbito en el que la normativa que lo regula establece unos requisitos en cuanto a recursos humanos, técnicos y materiales que la Comunidad de Madrid no puede satisfacer por no disponer de ellos.

En consecuencia con lo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, la CPSFIN considera necesario licitar el presente contrato en aras de garantizar la adecuada protección de sus bienes y recursos humanos, así como la correcta prestación de los servicios que le corresponden.

Al tratarse de un contrato oneroso el instrumento legal más adecuado para su tramitación es considerarlo como contrato del Sector Público y, puesto que su objeto son prestaciones de hacer consistentes en la obtención de un resultado distinto al de una obra o un suministro, el contrato idóneo es el de servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del



Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.

El Servicio de Seguridad y Vigilancia de la CPSFIN, tal y como se expone en los pliegos del contrato, se configura como **un conjunto esencial de servicios** incardinados entre sí para formar un sistema de seguridad integral que tiene como objeto cubrir la totalidad de las necesidades que, en materia de guarda y custodia de edificios, protección de bienes y personas, prevención ante situaciones de riesgo y respuesta ante alarmas y avisos de emergencia, pueden aparecer en un amplio número de escenarios posibles y contrastados.

Bajo esta perspectiva, se ha considerado conveniente y necesario dividir el contrato en dos lotes perfectamente diferenciados por la razón de las actividades que se pretenden ejecutar. Mediante esta decisión, no solo se cumple con la obligación impuesta a los poderes adjudicadores, a través del art. 99 de la LCSP, de prever la realización independiente de las diferentes partes de los contratos mediante su división en lotes, siempre que la naturaleza u objeto de éste lo permita, sino que también se garantiza una respuesta ajustada a la demanda, coordinada, proporcionada y acorde a los medios de los que se dispone.

En el primer lote, se han incluido los servicios de vigilancia y protección sin armas, los cuales **se consideran críticos para los intereses de la CPSFIN**. Estos servicios tienen carácter permanente y no permanente, pudiéndose asignar estos últimos de forma puntual, en función de las circunstancias. De esta manera, se consigue responder adecuadamente a dos exigencias que se han mostrado especialmente importantes en los últimos años. La primera de ellas está referida a la indispensable coordinación de los servicios que se integran en el Servicio de Seguridad y Vigilancia, mientras que la segunda, fruto de las demandas que en materia de seguridad se han recogido en los últimos años, es la posibilidad de realizar asignaciones del servicio de vigilancia y protección en función de las necesidades, fundamentalmente en los Centros Base de Atención a la Discapacidad, durante los horarios de atención al público, cuando se prevean situaciones potencialmente de riesgo para la seguridad de los empleados públicos que prestan servicio en ellos.

Para hacer frente a las necesidades de coordinación y control, se ha establecido el puesto permanente ubicado en la sede principal de la CPSFIN desde el que se controlarán y, en su caso, se activarán las distintas actividades. Este puesto permanente cubre las 24 horas del día y los 365 días del año y, además de prestar servicio de vigilancia y protección en el inmueble y sus diversas dependencias, ejerce como único interlocutor con la central receptora de alarma, de tal manera que tanto la activación del servicio de respuesta ante alarmas y avisos de emergencia como el control de la respuesta, se realiza bajo un criterio único que facilita la armonización. De igual forma, sirve como repositorio principal de llaves códigos y cualquier otro medio de acceso a los inmuebles de la Consejería, independientemente del depósito general y custodia de llaves cuyo servicio se llevará a cabo desde las instalaciones de la empresa adjudicataria de lo lote 2, y cuyo fin más inmediato es facilitar la rápida intervención del servicio de mantenimiento 24 horas. Por último, y no menos importante, cabe señalar



que las mejoras que se pretenden introducir en los sistemas de vigilancia electrónica, en particular en el sistema de videovigilancia y antirrobo e intrusión, prevén centralizar en este puesto permanente la gestión y control de todas las cámaras situadas en los edificios de la Consejería, lo que asegurará un doble control en materia de seguridad, así como un tratamiento más garantista de las imágenes capturadas en aras de cumplir con las obligaciones en materia de protección de datos personales.

En cuanto a la segunda de las exigencias, relacionada con la posibilidad de disponer ocasionalmente de un servicio de vigilancia y protección en centros en los que no se presta de forma permanente, el diseño del Servicio de Seguridad y Vigilancia permite asignar la presencia de vigilantes de seguridad para el mantenimiento correcto del orden y como elemento de disuasión ante posibles agresiones, siempre que las circunstancias así lo aconsejen.

En lo que se refiere al segundo lote, éste incluye el servicio de gestión de señales de alarma y avisos de emergencia, a través de Central Receptora de Alarmas (CRA), dado el carácter especializado de la prestación y el hecho de requerir, por parte de la empresa contratista, unos requisitos de homologación específicos por parte del Ministerio del Interior, así como los servicios complementarios de respuesta, conocido comúnmente como servicio ACUDA, depósito general y custodia de llaves en instalaciones ajenas a la CPSFIN y apertura y cierre de las dependencias fuera de los horarios habituales establecidos.

Madrid, a fecha de firma.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

Fdo. Salvador Sanz Iglesia

